



Convenio de colaboración entre la Fiscalía Superior de Cataluña y la Oficina Antifrau de Cataluña

Barcelona, 15 de diciembre de 2010

REUNIDOS

De una parte, la Excm. Sra. D.^a Teresa Compte Massachs, Fiscal Superior de Cataluña, que interviene en virtud de la representación conferida por los artículos 96.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y 22.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante, EOMF).

Y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. David Martínez Madero, Director de la Oficina Antifrau de Cataluña, que interviene como representante legal de la misma, de conformidad con lo previsto en la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifrau de Cataluña, y el artículo 5 de sus Normas de Actuación y de Régimen Interior aprobadas por el Parlamento en fecha 25 de noviembre de 2009 (DOGC núm. 5522, de 9.12.2009).

EXPONEN

Primero. Que el Ministerio Fiscal, como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución y artículos 1 y 2 del EOMF).

Establece el artículo 5 del EOMF que «El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.»

La experiencia alcanzada pone de manifiesto la existencia de supuestos en los que, en el transcurso de diligencias preprocesales, informativas o de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal, este aprecia la falta de relevancia penal de los hechos aunque los mismos podrían resultar



merecedores de un ulterior análisis desde la perspectiva del ámbito propio de actuación de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Segundo. Que la Oficina Antifraude de Cataluña (en adelante, OAC) es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia creada por el Parlamento de Cataluña mediante la Ley 14/2008, de 5 de noviembre (DOGC núm. 5256, de 12 de noviembre de 2008), que tiene entre sus finalidades prevenir e investigar posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

La OAC ejerce también la potestad indicativa, que incluye el asesoramiento y la emisión de propuestas y recomendaciones a las administraciones públicas y organismos que constituyen su ámbito de competencia subjetiva, para que estos puedan adoptar medidas contra la corrupción y las prácticas fraudulentas, cooperando con las autoridades competentes y colaborando en la formación en este ámbito del personal al servicio del sector público.

A los expresados efectos, la OAC proyecta el ejercicio de sus funciones sobre el sector público de Cataluña en los términos definidos por el artículo 2 de la Ley 14/2008.

Establece el artículo 7.2 de la Ley 14/2008 que la OAC «no puede cumplir funciones correspondientes a la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la policía judicial ni puede investigar los mismos hechos que sean objeto de sus investigaciones. En el supuesto de que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal inicien un procedimiento para determinar la relevancia penal de unos hechos que constituyan a la vez el objeto de actuaciones de investigación de la Oficina Antifraude, esta debe interrumpir acto seguido dichas actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de que disponga, además de proporcionar el apoyo necesario a la autoridad competente».

Según el artículo 21.2 de la mencionada ley, «Si en el curso de las actuaciones emprendidas por la Oficina Antifraude se observan indicios de que [...] se han producido conductas o hechos presumiblemente delictivos, el director o directora de la Oficina Antifraude lo debe comunicarlo [...] de forma inmediata al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial».

Por otro lado, según el artículo 15.1 de la Ley 14/2008, «La Oficina Antifraude de Cataluña debe cooperar con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal [...]. A tales efectos y dentro de los supuestos legales, la OAC debe aportar toda la información de que disponga y proporcionar el apoyo necesario a la institución u órgano que lleve a cabo la correspondiente investigación o fiscalización.»



Finalmente, el artículo 20 de las Normas de Actuación y Régimen Interior de la OAC (aprobadas por el Parlamento de Cataluña y publicadas en el DOGC núm. 5522, de 9.12.2009) determina que «los expedientes de investigación terminan mediante resolución motivada del director o directora, que puede acordar: a) La denuncia ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal [...]».

Tercero. El profundo conocimiento del fenómeno de la criminalidad relacionada con la corrupción (delitos contra la Administración Pública, contra la ordenación del territorio y demás) conseguido a lo largo del tiempo por el Ministerio Fiscal en Cataluña, y el que pueda llegar a adquirir la Oficina Antifraude de Cataluña en el ejercicio de su cometido, constituyen una fuente valiosa para la formación del respectivo personal a su servicio que puede ser aprovechada en beneficio mutuo y, en definitiva, en el de la sociedad a la que sirven ambas instituciones.

Cuarto. Habilitación normativa

El artículo 96.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé la posibilidad de que la Generalitat suscriba convenios con el Ministerio Fiscal.

Por su parte, el artículo 11 del EOMF contempla la celebración de convenios entre el Ministerio Fiscal y las Comunidades Autónomas, previa autorización del Fiscal General del Estado.

Finalmente, el artículo 15 de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña, autoriza a esta a celebrar convenios y protocolos de actuación, previsión desarrollada, a su vez, por el artículo 34 de sus Normas de Actuación y de Régimen Interior.

Quinto. De acuerdo con el marco normativo expresado, es interés de ambas instituciones establecer vías de colaboración que, respetando el ámbito propio de atribuciones de cada una, favorezcan el cumplimiento de las finalidades de interés general respectivamente asignadas, inspirándose en los principios de lealtad institucional e información recíproca.

En virtud de la expresada voluntad, de acuerdo con la autorización previa del Fiscal General del Estado prevista en el artículo 11 del EOMF, ambas partes acuerdan la firma del presente convenio de colaboración, que se registrará por las siguientes



CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio

El objeto del presente convenio es el establecimiento y la fijación de líneas de colaboración entre las instituciones signatarias.

A dicho efecto, con carácter enunciativo y no limitativo, se establecen las líneas de colaboración siguientes:

- Traslado al/a la Fiscal Superior de Cataluña de aquellas denuncias que efectúe la Oficina Antifraude de Cataluña llevando causa en las investigaciones que esta haya llevado a cabo.
- Traslado recíproco de aquella información necesaria para dar cumplimiento a la normativa vigente en lo que respecta a la delimitación de funciones de ambas instituciones. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 14/2008, la OAC se compromete a que, cuando tenga conocimiento -por cualquier medio- que hechos que esta examina o haya podido examinar puedan tener relación con los que el Ministerio Fiscal se encuentre investigando, le comunicará dicha circunstancia, solicitándole comunicación sobre las actuaciones llevadas a cabo al efecto de comprobar la identidad del objeto y, en su caso, proceder a paralizar las actuaciones y poner a disposición la información de que disponga la OAC, si así resulta requerida.

A su vez, y sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, cuando a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal se concluya que los hechos no tienen relevancia penal, pero sí podrían resultar constitutivos de irregularidades, prácticas o comportamientos opuestos a la probidad o contrarios a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la Ley y al Derecho, la Fiscalía Superior de Cataluña, atendiendo a la naturaleza de las diligencias previstas en el artículo 5 del EOMF, procederá a dar traslado a la OAC del correspondiente decreto de archivo y remitirá aquella documentación que, habiendo servido de base para adoptar su decisión, pueda constituir antecedente para la ulterior actuación de la OAC.

En el mismo sentido, si el Ministerio Fiscal, con ocasión de su intervención en un procedimiento judicial en el que sea parte, llega a la conclusión de que los hechos incurren en dichas irregularidades, además de posicionarse procesalmente instando lo que resulte procedente, solicitará a la autoridad judicial que remita



testimonio de los antecedentes suficientes a la Oficina Antifraude de Cataluña.

En tales casos, la OAC se compromete a dar cuenta al Ministerio Fiscal, por conducto de la Fiscalía Superior de Cataluña, de cuál haya sido del resultado de sus actuaciones.

A los efectos mencionados, y al amparo de lo previsto en el artículo 25 del EOMF, el/la Fiscal Superior de Cataluña podrá dictar las correspondientes instrucciones.

- Apoyo al Ministerio Público mediante la colaboración que este pueda solicitar de personal técnico de la OAC a los efectos de emisión de dictámenes, informes u otras actuaciones, siempre en la medida de las disponibilidades de la OAC y dando conocimiento de ello en cualquier caso al/a la Fiscal Superior.
- Traslado a la Fiscalía Superior de Cataluña de aquellas conductas de que el personal al servicio de la Oficina Antifraude, en ocasión del ejercicio de funciones de investigación, sea objeto y puedan resultar constitutivas de cualquier infracción penal contra el orden público, a los efectos de que el Ministerio Fiscal promueva la acción de la justicia (de conformidad con los arts. 17.2 a de la Ley 14/2008 y 40 NARI).
- Mutua información y, si procede, conjunta organización, respecto de aquellas actividades formativas o de actualización que permitan a los miembros de las instituciones respectivas un mejor conocimiento de la realidad sobre la que actúen.
- Traslado recíproco de las respectivas memorias de actividad, así como de aquellas publicaciones propias que puedan ser consideradas de mutuo interés.

Segunda. Protocolos de actuación

La implementación de las líneas de colaboración a que hace referencia la cláusula anterior, cuando proceda, podrá instrumentarse mediante la firma de los correspondientes protocolos que definirán aspectos concretos como los sistemas de acceso a las informaciones, plazos, fórmulas de traslado, órganos implicados, presupuesto y medios humanos y materiales requeridos.

Corresponde a la comisión mixta a la que se refiere la cláusula siguiente elaborar y elevar propuesta de los protocolos de actuación a los firmantes del presente convenio.



Tercera. Comisión de seguimiento

Se constituirá una comisión mixta integrada por dos personas, designadas cada una en representación de los firmantes de este convenio, que tendrá por funciones proponer los términos concretos de las diferentes colaboraciones; la preparación, en su caso, de los protocolos de actuación y la resolución de las dudas o discrepancias que se puedan plantear en la interpretación o la ejecución de estos.

Cuarta. Eficacia temporal

El presente convenio produce efectos desde su firma y tiene vigencia indefinida.

El acuerdo podrá ser denunciado por ambas partes, y en cualquier momento, una vez transcurridos cinco años de vigencia, dirigiendo la parte que ejerza dicha facultad escrita a la otra.

La extinción producirá efectos una vez transcurridos seis meses de dicha denuncia, sin perjuicio de finalizar aquellas actuaciones ya iniciadas y que, por razones de interés público, se deban llevar a cabo.

Quinta. Publicidad

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 34.4 de las Normas de Actuación y de Régimen Interior de la Oficina Antifraude de Cataluña (DOGC núm. 5522, de 9.12. 2009), la OAC procederá a la publicación del presente convenio en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*, asumiendo los gastos que se deriven, sin perjuicio del compromiso de ambas partes de dar difusión en sus respectivas sedes electrónicas.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio, por duplicado, en el lugar y la fecha indicados anteriormente.

Excelentísima Señora
Doña Teresa Compte Massachs
Fiscal Superior de Cataluña

Ilustrísimo Señor
Don David Martínez Madero
Director de la Oficina Antifraude



Conveni de col·laboració entre la Fiscalia Superior de Catalunya i l'Oficina Antifrau de Catalunya

Barcelona, 15 de desembre de 2010

REUNITS

D'una part, l'Excma. Sra. Teresa Compte Massachs, Fiscal Superior de Catalunya, que intervé en virtut de la representació conferida pels articles 96.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 22.4 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (en endavant, EOMF).

D'una altra part, l'Il·lm. Sr. David Martínez Madero, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que intervé com a representant legal d'aquesta, de conformitat amb allò que preveu la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 5 de les seves normes d'actuació i de règim interior aprovades pel Parlament amb data 25 de novembre del 2009 (DOGC núm. 5522 del 9.12.2009).

EXPOSEN

Primer. Que el Ministeri Fiscal, com a òrgan de rellevància constitucional amb personalitat jurídica pròpia, integrat amb autonomia funcional en el Poder Judicial, té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels interessats, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant d'aquests la satisfacció de l'interès social (article 124 de la Constitució i arts. 1 i 2 EOMF).

Estableix l'article 5 EOMF que *"El Fiscal podrà rebre denúncies, trametent-les a l'autoritat judicial o decretant-ne el seu arxivament, quan no apreciï fonaments per exercitar cap acció, notificant en aquest darrer cas la decisió al denunciant"*.

L'experiència assolida posa de manifest l'existència de supòsits en què, en el decurs de diligències preprocessals, informatives o d'investigació dutes a terme pel Ministeri Fiscal, aquest aprecia la manca de rellevància penal dels fets tot i que els mateixos podrien resultar mereixedors d'una ulterior anàlisi des de la perspectiva de l'àmbit propi d'actuació de l'Oficina Antifrau de Catalunya.



Segon. Que l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant OAC) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia creada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 14/2008, de 5 de novembre (DOGC núm. 5256 del 12.11.2008), que té entre les seves finalitats prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

L'OAC exerceix també la potestat indicativa, que comprèn l'assessorament i l'emissió de propostes i recomanacions a les administracions públiques i organismes que constitueixen el seu àmbit de competència subjectiva, per tal que puguin adoptar-ne mesures contra la corrupció i les pràctiques fraudulentament, cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic.

Als expressats efectes, l'OAC projecta l'exercici de les seves funcions sobre el sector públic de Catalunya en els termes definits per l'article 2 de la Llei 14/2008.

Estableix l'article 7.2 de la Llei 14/2008 que l'OAC "no pot complir funcions corresponents a l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d'uns fets que constitueixin alhora l'objecte d'actuacions d'investigació de l'Oficina Antifrau, aquesta ha d'interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota informació de què disposi, a més de proporcionar el suport necessari a l'autoritat competent".

Segons l'article 21.2 de l'esmentada llei "Si en el decurs de les actuacions empreses per l'Oficina Antifrau s'observen indicis que (...) han tingut lloc conductes o fets presumiblement delictius, el director o directora de l'Oficina Antifrau ho ha de comunicar (...) de manera immediata al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial".

D'altra banda, segons l'article 15.1 de la Llei 14/2008, "L'Oficina Antifrau de Catalunya ha de cooperar amb (...) el Ministeri Fiscal (...). A aquests efectes i dins els supòsits legals, l'OAC ha d'aportar tota la informació de què disposi i ha de proporcionar el suport necessari a la institució o a l'òrgan que dugui a terme la corresponent investigació o fiscalització".

Finalment, l'article 20 de les Normes d'actuació i de règim interior de l'OAC (aprovades pel Parlament de Catalunya i publicades al DOGC núm. 5522 de 9.12.2009) determina que "Els expedients d'investigació es clouen



mitjançant resolució motivada del director o directora, que pot acordar: a) La denúncia davant l'autòritat judicial o el Ministeri Fiscal (...)".

Tercer. El profund coneixement del fenomen de la criminalitat relacionada amb la corrupció (delictes contra l'Administració Pública, contra l'ordenació del territori i d'altres) assolit al llarg del temps pel Ministeri Fiscal a Catalunya, i aquell que pugui arribar a adquirir l'Oficina Antifrau de Catalunya en l'exercici de la seva comesa, constitueixen una font valuosa per a la formació del respectiu personal al seu servei que pot ser aprofitada en benefici mutu i, en definitiva, en el de la societat a la que serveixen totes dues institucions.

Quart. Habilitació normativa.

L'article 96.4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya preveu la possibilitat que la Generalitat subscrigui convenis amb el Ministeri Fiscal.

Per la seva banda, l'article 11 EOMF contempla la celebració de convenis entre el Ministeri Fiscal i les Comunitats Autònomes, prèvia autorització del Fiscal General de l'Estat.

Finalment, l'article 15 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, autoritza aquesta a celebrar convenis i protocols d'actuació, previsió desenvolupada, al seu torn, per l'article 34 de les seves Normes d'actuació i de règim interior.

Cinquè. Atenent el marc normatiu expressat, és interès d'ambdues institucions establir vies de col·laboració que, respectant l'àmbit propi d'atribucions de cadascuna, afavoreixin l'acompliment de les finalitats d'interès general respectivament assignades, tot inspirant-se en els principis de lleialtat institucional i informació recíproca.

En virtut de l'expressada voluntat, d'acord amb l'autorització prèvia del Fiscal General de l'Estat prevista en l'article 11 de l'EOMF, ambdues parts acorden la signatura del present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.

L'objecte del present conveni és l'establiment i la fixació de línies de col·laboració entre les institucions signatàries.



A tal efecte, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s'estableixen les línies de col·laboració següents:

- Trasllet al/ a la Fiscal Superior de Catalunya d'aquelles denúncies que efectui l'Oficina Antifrau de Catalunya portant causa en les investigacions que aquesta hagi dut a terme.
- Trasllet recíproc d'aquella informació necessària per donar compliment a la normativa vigent pel que fa a la delimitació de funcions d'ambdues institucions. En particular, i sens perjudici d'allò que disposa l'article 7.2 de la Llei 14/2008, l'OAC es compromet a què, quan tingui coneixement -per qualsevol mitjà-, que fets que aquesta examina o hagi pogut examinar, puguin tenir relació amb els que el Ministeri Fiscal es trobi investigant, li farà saber aquesta circumstància, sol·licitant-li comunicació sobre les actuacions dutes a terme a fi i efecte de comprovar la identitat d'objecte i, en el seu cas, procedir a paralitzar les actuacions i posar a disposició la informació de què disposi l'OAC, si així resulta requerida.

Al seu torn, i sens perjudici de les funcions atribuïdes al Tribunal de Comptes, quan arrel de les investigacions dutes a terme pel Ministeri Fiscal es conclouï que els fets no tenen rellevància penal, però sí podrien resultar constitutius d'irregularitats, pràctiques o comportaments oposats a la probitat o contraris als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, la Fiscalia Superior de Catalunya, atenent a la naturalesa de les diligències previstes en l'article 5 de l'EOMF, procedirà a donar trasllet a l'OAC del corresponent decret d'arxivament i trametrà aquella documentació que, havent servit de base per adoptar la seva decisió, pugui constituir antecedent per a l'ulterior actuació de l'OAC.

En el mateix sentit, si el Ministeri Fiscal, amb ocasió de la seva intervenció en un procediment judicial en el que sigui part, arriba a la conclusió que els fets incorren en les esmentades irregularitats, a més de posicionar-se processalment instant allò que resulti procedent, sol·licitarà a l'autoritat judicial que remeti testimoni dels antecedents suficients a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

En tals casos, l'OAC es compromet a donar compte al Ministeri Fiscal, pel conducte de la Fiscalia Superior de Catalunya, de quin hagi estat el resultat de les seves actuacions.

Al esmentats efectes, i a l'empara d'allò que preveu l'article 25 EOMF el/la Fiscal Superior de Catalunya podrà dictar les corresponents instruccions.



- Suport al Ministeri Públic mitjançant la col·laboració que aquest pugui sol·licitar de personal tècnic de l'OAC als efectes de l'emissió de dictàmens, informes o d'altres actuacions. Sempre en la mesura de les disponibilitats de l'OAC i donant-ne coneixement en tot cas al/a la Fiscal Superior.
- Trasllat a la Fiscalia Superior de Catalunya d'aquelles conductes de què el personal al servei de l'Oficina Antifrau, amb ocasió de l'exercici de funcions d'investigació, sigui objecte i puguin resultar constitutives de qualsevol infracció penal contra l'ordre públic, als efectes que el Ministeri Fiscal promogui l'acció de la justícia (de conformitat amb els arts. 17.2 a) Llei 14/2008 i 40 NARI).
- Mútua informació i, si escau, conjunta organització, respecte d'aquelles activitats formatives o d'actualització que permetin als membres de les institucions respectives un millor coneixement de la realitat sobre la que actuen.
- Trasllat recíproc de les respectives memòries d'activitat així com d'aquelles publicacions pròpies que puguin ser considerades de mutu interès.

Segona. Protocols d'actuació.

La implementació de les línies de col·laboració a què fa referència la clàusula anterior, quan s'escaigui, podrà instrumentar-se mitjançant la signatura dels corresponents protocols que definiran aspectes concrets com els sistemes d'accés a les informacions, terminis, fórmules de trasllat, òrgans implicats, pressupost i mitjans humans i materials requerits.

Correspon a la comissió mixta a què fa referència la clàusula següent elaborar i elevar proposta dels protocols d'actuació als signants del present conveni.

Tercera. Comissió de seguiment.

Es constituirà una comissió mixta integrada per dues persones, designades cadascuna en representació dels signants d'aquest conveni, que tindrà com a funcions proposar els termes concrets de les diferents col·laboracions; la preparació, en el seu cas, dels protocols d'actuació i la resolució dels dubtes o discrepàncies que es puguin plantejar en la interpretació o l'execució d'aquests.



Quarta. Eficàcia temporal.

Aquest conveni produeix efectes des de la seva signatura i té vigència indefinida.

L'acord podrà ser denunciat per ambdues parts, i en qualsevol moment, un cop transcorreguts cinc anys de vigència, adreçant la part que exerceixi dita facultat escrit a l'altra.

L'extinció produirà efectes un cop transcorreguts sis mesos de l'esmentada denúncia, sens perjudici de finalitzar aquelles actuacions ja endegades i que, per raons d'interès públic, s'hagin de dur a terme.

Cinquena. Publicitat.

En compliment d'allò que estableix l'article 34.4 de les Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya (DOGC núm. 5522 del 9.12.2009), l'OAC procedirà a la publicació del present conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, assumint les despeses que se'n derivin, sens perjudici del compromís d'ambdues parts de donar-ne difusió a les seves respectives seues electròniques.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Excel·lentíssima Senyora
Teresa Compte i Massachs
Fiscal Superior de Catalunya

Il·lustríssim Senyor
David Martínez Madero
Director de l'Oficina Antifrau